



Observatorio de Políticas Públicas



Coordinación General del Cuerpo de
ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CAT. OPP/CAG/2005-17

RÉGIMEN MONETARIO Y CAMBIARIO
REGULACIÓN PRUDENCIAL SOBRE SOLVENCIA
REGULACIÓN PRUDENCIAL SOBRE LIQUIDEZ
CREACIÓN Y EXPANSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

DICIEMBRE DE 2005



REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CAT. OPP/CAG/2005-17

Autores:

AG Estela Del Pino

AG Jorge Colombo

Este documento fue producido por los responsables del Area Temática “Regulación del Sistema Financiero” del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el mes de diciembre del año 2005.

El Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales inició sus actividades en el año 2002 en jurisdicción de la Coordinación General del C.A.G., sus documentos son publicados en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Sitio Oficial: www.cag.jgm.gov.ar

*AG V. Daniel Piemonte
Coordinador General
Cuerpo de Administradores Gubernamentales*

*AG Guillermo J. Alabés
Coordinador Ejecutivo
Observatorio de Políticas Públicas*

INDICE TEMATICO

Introducción

1. Régimen monetario y cambiario.

- 1.1. Marco introductoria.
- 1.2. Síntesis de la normativa vigente en materia de comercio exterior y cambios.
 - 1.2.1. Ingresos
 - 1.2.1.a) Cobros de exportaciones de bienes.
 - 1.2.1.b) Cobros de exportaciones de servicios.
 - 1.2.1.c) Rentas y transferencias corrientes.
 - 1.2.1.d) Capitales.
 - 1.2.1.e) Otros conceptos.
 - 1.2.2. Egresos
 - 1.2.2.a) Pagos de importaciones de bienes.
 - 1.2.2.b) Pago de servicios.
 - 1.2.2.c) Rentas (intereses, utilidades y dividendos).
 - 1.2.2.d) Deudas financieras.
 - 1.2.2.e) Ventas de cambio a no residentes.
 - 1.2.3. Otros
 - 1.2.3.a) Mercado de capitales.
 - 1.2.3.b) Operaciones por cajeros automáticos.
 - 1.2.3.c) Relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no financiero.
 - 1.2.3.d) Relevamiento de inversiones directas.
 - 1.2.3.e) Otros.

2. Regulación prudencial sobre solvencia.

- 2.1. Capitales mínimos.
 - 2.1.1. Marco introductoria. Las normas de Basilea sobre Capitales Mínimos.
 - 2.1.2. Regulación prudencial sobre capitales mínimos.
- 2.2. Fraccionamiento y graduación del crédito (riesgo crediticio)
- 2.3. Clasificación de deudores, su provisionamiento y garantías.
- 2.4. Operaciones con clientes vinculados.
- 2.5. Activos inmovilizados y otros conceptos.
- 2.6. Posición gomal neta de moneda extranjera.
- 2.7. Capacidad de préstamo en moneda extranjera.

3. Regulación prudencial sobre liquidez.

- 3.1. Efectivos mínimos.
- 3.2. Asistencia financiera del BCRA por iliquidez.

4. Creación y expansión de entidades financieras y cambiarias.

- 4.1. Instalación de nuevas entidades financieras.
- 4.2. Fusión, absorción y transferencia de fondos de comercio.
- 4.3. Transformación de entidades financieras.
- 4.4. Modificación de la composición accionaria.
- 4.5. Directivos y Gerentes.
- 4.6. Instalación de filiales.
 - 4.6.1. Instalación de filiales y otras dependencias en el país.
 - 4.6.2. Instalación de filiales y oficinas de representación en el exterior.
 - 4.6.3. Participación en entidades financieras en el exterior.
 - 4.6.4. Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país.

5. Fuentes informativas.

Introducción

El presente trabajo ha sido elaborado para el Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, entre setiembre y noviembre del corriente año.

El área temática elegida es la Regulación del sistema financiero. Desde esa óptica, se presenta aquí una síntesis de toda la normativa vigente en esa materia, dividiéndola en cuatro unidades de análisis:

- 1. Régimen monetario y cambiario.**
- 2. Regulación prudencial sobre solvencia.**
- 3. Regulación prudencial sobre liquidez.**
- 4. Creación y expansión de entidades financieras y cambiarias.**

La actividad financiera está ampliamente regulada en todo el mundo. En nuestro país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es la autoridad de aplicación de la Ley de Entidades Financieras, de acuerdo a la Ley 24.144 y modificatorias, que es su Carta Orgánica. Entre las principales misiones tiene la de preservar el valor de la moneda (artículo 3º) y la de “vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten” (artículo 4º).

No se describe en el presente el marco legal de la actividad, aunque a veces se hace mención a él. Se sugiere para profundizar el análisis consultar la página web del BCRA: www.bcra.gov.ar. Aquí nos concentramos en la normativa vigente para la actividad, que por ser muy vasta, está sintetizada de modo que el lector pueda tener después de su lectura una idea general y completa (no profunda) de las regulaciones del sistema financiero, con miras a continuar a través de este Observatorio de Políticas Públicas, actualizando semestralmente la misma. Para abundar en otros detalles se sugiere consultar las referencias que se incluyen al final como “Fuentes informativas”.

En el apartado de Régimen monetario y cambiario están esbozados los principales lineamientos, pero por ser muy específicos y extensos, a los fines de guardar un equilibrio dentro del trabajo, se exponen muy suscintamente las cuestiones referidas al mercado cambiario. Respecto del régimen monetario, después de la salida de la Convertibilidad estamos en un régimen de flotación cambiaria (con una fuerte intervención del BCRA) y existe un Programa Monetario que ha sido presentado al Congreso de la Nación a fines de 2004 que no está analizado aquí por no ser parte de la normativa (que es nuestro objeto de estudio) pero puede consultarse por Internet, como así también el seguimiento trimestral y mensual del mismo. Se encuentra en elaboración el programa monetario para el 2006.

1. Régimen monetario y cambiario

1.1. Marco introductorio

En enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561, vigente a partir del 6 de enero de 2002. Esta ley declaró la emergencia pública en material social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, e introdujo modificaciones en la Ley 23.928 de Convertibilidad.

El Decreto 1606/2001 dispuso el reestablecimiento de la obligación de ingreso al país y liquidación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de cobros de exportaciones y la condición previa de esa liquidación para acceder a cualquier beneficio o devolución de tributos que correspondan a las exportaciones.

El Decreto 260/02 del 8/2/02, dispuso el establecimiento de un Mercado Unico y Libre de Cambios, por el que se deben cursar todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras. Estableció asimismo que las operaciones deben sujetarse a los requisitos y reglamentación del BCRA.

1.2. Síntesis de la normativa vigente en materia de comercio exterior y cambios

1.2.1. Ingresos

Los ingresos básicamente provienen de:

- a) cobros de exportaciones de bienes,
- b) cobros de exportaciones de servicios,
- c) rentas y transferencias corrientes,
- d) capitales,
- e) otros conceptos.

1.2.1.a) Cobros de exportaciones de bienes.

Se mantiene la obligación de liquidación en el mercado de cambios de las divisas por cobros de exportaciones de bienes (FOB, CyF, DDP, EXW, FAS o FCA, según corresponda) y servicios. Los plazos para la liquidación de las divisas correspondientes a cobros de exportaciones de bienes, que son fijados por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, se cuentan a partir de la fecha del cumplimiento de embarque y, dependiendo del tipo de producto, varían entre 60 y 360 días corridos.

1.2.1.b) Cobros de exportaciones de servicios.

Existe la obligación de liquidación en el mercado de cambios de las divisas percibidas por las exportaciones de servicios, por el 100% del monto efectivamente percibido, neto de retenciones o descuentos efectuados en el exterior por el cliente.

En el caso de servicios prestados en el país a no residentes, el ingreso deberá corresponder al 100% del monto que se perciba en moneda extranjera.

Los ingresos por servicios prestados a no residentes, tienen 135 días hábiles para su liquidación, los que se cuentan desde la fecha de percepción en el exterior o en el país, o su acreditación en cuentas del exterior.

1.2.1.c) Rentas y transferencias corrientes.

No existen regulaciones que establezcan la obligación de liquidación.

1.2.1.d) Capitales

Las operaciones de endeudamiento con el exterior del sector privado no financiero y sector financiero por bonos, préstamos financieros (incluyendo operaciones de pase de valores), y las líneas de crédito del exterior de carácter financiero deben ingresarse y liquidarse en el Mercado Unico y Libre de Cambios.

Las emisiones de títulos de deuda del sector privado (financiero y no financiero) denominados en moneda extranjera cuyos servicios de capital e intereses no sean exclusivamente pagaderos en pesos en el país, deben ser suscriptos en moneda extranjera y los fondos obtenidos deben ser liquidados en el mercado local.

Los nuevos endeudamientos financieros ingresados en el mercado local de cambios y las renovaciones de deudas con el exterior de residentes en el país del sector financiero y del sector privado no financiero, que se realicen a partir del 10/6/05 inclusive, deben pactarse y mantenerse por plazos mínimos de 365 días corridos, no pudiendo ser cancelados con anterioridad al vencimiento de ese plazo, cualquiera sea la forma de cancelación de la obligación con el exterior e independientemente de si la misma se efectúa o no con acceso al mercado local de cambios.

En función de lo dispuesto por el Decreto N° 616/2005 del 9 de junio del corriente, mediante Comunicación "A" 4359 se reglamentó la constitución de depósitos no remunerados en entidades financieras locales con las características señaladas en la Comunicación "A" 4360, que se constituirán en dólares estadounidenses por el 30% del equivalente en dólares

estadounidenses del total de la operación que da lugar a la constitución del depósito, cuando se registren, a partir del 10/6/05 ingresos de moneda extranjera en el mercado de cambios por los conceptos detallados en la norma citada.

1.2.1.e) Otros conceptos.

Los montos percibidos en moneda extranjera por residentes por la enajenación de activos no financieros no producidos, como ser: pases de deportistas, patentes, marcas, derechos de autor, regalías, derechos de licencia, concesiones, arrendamientos y otros contratos transferibles, deberán ingresarse y liquidarse en el mercado local de cambios dentro de los 30 días corridos de la fecha de percepción de los fondos en el país o en el exterior o de su acreditación en cuentas del exterior.

1.2.2. Egresos

Los egresos básicamente provienen de:

- a) pagos de importaciones de bienes,
- b) pago de servicios,
- c) rentas (intereses, utilidades y dividendos),
- d) deudas financieras,
- e) ventas de cambio a no residentes,
- f) derivados financieros,
- g) formación de activos externos de residentes,
- h) posición general de cambios de las entidades autorizadas,

1.2.2.a) Pagos de importaciones de bienes.

En el caso de importaciones de bienes de consumo y uso final comprendidos en el Anexo a la Comunicación "A" 4372, embarcados con posterioridad al 23/6/05, que no estuvieran amparados con créditos documentarios abiertos por entidades financieras locales hasta esa fecha, el acceso al mercado de cambios para su pago debe efectuarse en forma anticipada, o antes de los 30 días corridos posteriores a la fecha del despacho a plaza de los bienes, o de su ingreso a la zona franca (ZFI).

1.2.2.b) Pago de servicios.

No existe ningún tipo de restricción para el pago al exterior de servicios prestados por no residentes, cualquiera sea el concepto (fletes, seguros, regalías, asesoramiento técnico, honorarios, etc.).

1.2.2.c) Rentas (intereses, utilidades y dividendos).

Se admite el acceso al Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) para el pago de servicios de intereses del sector privado no financiero y del sector financiero en las siguientes condiciones:

- con una antelación de hasta 15 días corridos a la fecha de vencimiento de cada cuota de interés,
- devengados en cualquier momento del período corriente de intereses,
- desde la fecha de desembolso de los fondos hasta la fecha de la efectiva liquidación de los mismos en el mercado de cambios local, el acceso al mercado de cambios es por la diferencia entre los intereses devengados por la deuda y la renta ganada por los fondos depositados en el exterior, y en la medida que la liquidación de los fondos en el mercado de cambios del endeudamiento, se haya encuadrado en la normativa cambiaria que fuera aplicable, y que el cliente aporte las constancias correspondientes que permitan determinar inequívocamente las rentas ganadas por los fondos depositados en el exterior.

1.2.2.d) Deudas financieras.

Se admite el acceso al Mercado Unico y Libre de Cambios para el pago de servicios de capital de deudas externas en las condiciones estipuladas en la normativa, siendo diferentes las condiciones para los servicios de capital de deudas externas del sector privado no financiero, de las del sector financiero.

1.2.2.e) Ventas de cambio a no residentes.

Los no residentes pueden acceder al MULC para realizar compras de divisas para su transferencia a sus cuentas en bancos del exterior, por los fondos cobrados en el país provenientes de los conceptos aceptados en la normativa vigente. Las operaciones comprendidas en los incisos a), b), c), d) y e) no tienen límite de monto. En cambio, cuando el conjunto de las operaciones comprendidas en los puntos f), g) y h), superen el equivalente de u\$s 2.000.000 mensuales, o las del punto h) los u\$s 500.000 mensuales por persona física o jurídica no residente, se requiere la conformidad previa del BCRA. En los casos c) a h), debe verificarse que la inversión registre la permanencia mínima de los fondos en el país que sea aplicable.

1.2.2.f) Derivados financieros.

Las concertaciones y cancelaciones de operaciones de futuros en mercados regulados, forwards, opciones y cualquier otro tipo de derivados, cuyas liquidaciones se efectúen en el país por compensación en moneda doméstica, no están sujetas al previo cumplimiento de requisitos desde el punto de vista de la normativa cambiaria.

En el caso de operaciones realizadas con el exterior no es necesario el requisito de conformidad previa del BCRA para la concertación y acceso al

mercado de cambios para el pago de primas, constitución de garantías y cancelaciones que correspondan, de las operaciones de futuros, forwards, opciones y otros derivados previstos en la norma vigente (Comunicación “A” 3602). El resto de las operaciones de futuros, forwards, opciones y otros derivados con el exterior, requieren la conformidad previa del BCRA, tanto para su concertación, como para acceder al mercado de cambios para su posterior cancelación.

1.2.2.g) Formación de activos externos de residentes,

Las personas físicas y jurídicas residentes no comprendidas en el sector financiero pueden acceder al Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) para realizar, con un límite mensual, compras de cambio por conceptos tales como por ejemplo: inversiones inmobiliarias en el exterior, préstamos otorgados a no residentes, aportes de inversiones directas en el exterior de residentes, inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas, otras inversiones en el exterior de residentes, inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas, compra para tenencias de billetes extranjeros en el país y compra de cheques de viajero, inversiones de portafolio de Fondos Comunes de Inversión, compra de billetes de Fondos Comunes de Inversión y donaciones.

El límite mensual en el conjunto de entidades financieras, es actualmente de u\$s 2.000.000.

1.2.2.h) Posición general de cambios de las entidades autorizadas.

La posición general de cambios (PGC) de las entidades se compone de la totalidad de los activos externos líquidos de la entidad, como ser: disponibilidades en oro amonedada o en barras de buena entrega, billetes en moneda extranjera, tenencias de depósitos a la vista en bancos del exterior, inversiones en títulos públicos externos emitidos por países miembros de la OCDE cuya deuda soberana cuente con una calificación internacional no inferior a “AA”, y certificados de depósito a plazo fijo en entidades bancarias del exterior que cuenten con calificaciones internacionales no inferiores a “AA”, y los saldos deudores y acreedores de corresponsalía. También se incluyen las compras y ventas de estos activos que estén concertadas y pendientes de liquidación por operaciones de cambio con clientes a plazos no mayores a 48 horas.

1.2.3. Otros

1.2.3.a) Mercado de capitales.

Las operaciones de valores que se realicen en Bolsas y Mercados de Valores autorregulados, deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos:

- en pesos utilizando las distintas modalidades que permiten los sistemas de pago,
- en moneda extranjera mediante transferencia electrónica de fondos desde y hacia cuentas a la vista en entidades financieras locales, y
- contra cable sobre cuentas del exterior.

En ningún caso, se permite la liquidación de estas operaciones de compra y venta de valores mediante el pago en billetes en moneda extranjera, o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros.

1.2.3.b) Operaciones por cajeros automáticos.

Las compras para tenencia de billetes extranjeros en el país, las ventas de billetes en poder de residentes, y las operaciones de cambio por turismo y viajes, se pueden realizar sin restricciones de horarios a través de las redes locales de cajeros automáticos y por transferencias electrónicas entre cuentas del cliente en entidades locales.

1.2.3.c) Relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no financiero.

Mediante Comunicación "A" 3602 del 7.05.02 se dispuso implementar un Sistema de Relevamiento de Pasivos Externos y Emisiones de Títulos, cuyas declaraciones corresponden al endeudamiento a fin de cada trimestre calendario, comenzando con los pasivos al 31/12/01, que deben cumplir las personas físicas y jurídicas del sector privado financiero y no financiero.

1.2.3.d) Relevamiento de inversiones directas

Mediante Comunicación "A" 4237 del 10/11/04 se dispuso implementar un Sistema de Relevamiento de Inversiones Directas en el País de no Residentes y en el Exterior de Residentes argentinos, cuyas primeras declaraciones corresponden al período anual o semestral que finalizó el 31/12/04.

1.2.3.e) Otros.

En las operaciones de cambio que realicen las entidades autorizadas a operar en cambios con sus clientes, el titular de la operación tiene que realizar a su nombre, tanto los movimientos de divisas como de pesos. En este sentido, los movimientos que no se realicen en efectivo, deben corresponder a movimientos en cuentas del titular de la operación.

Las entidades autorizadas a operar en cambios solo pueden dar curso a operaciones de cambio por compras y ventas de divisas a residentes por la repatriación o constitución de inversiones de portafolio en el exterior, en la medida que la transferencia de las divisas tenga como titular de la cuenta/ subcuenta de origen o destino de los fondos, respectivamente, al cliente residente que efectúa la operación en el mercado de cambios. La identificación de la entidad del exterior donde está constituida la cuenta y el número de cuenta del cliente, debe quedar registrada en el boleto de cambio correspondiente.

En las operaciones de compra de cambio a no residentes, si el pago de la liquidación de cambio no se realiza en efectivo, corresponde la acreditación de los fondos en la cuenta local del no residente o del apoderado que realiza la operación por cuenta y orden del no residente. En el mismo sentido, en las operaciones de venta de cambio a clientes no residentes de acuerdo a las normas cambiarias que sean de aplicación, si el pago de la compra de la transferencia no se realiza en billetes pesos, el débito puede realizarse alternativamente en la cuenta del mandante o apoderado que realiza la operación o de la empresa compradora en los casos de compras de paquetes accionarios de empresas de inversiones directas.

Se acepta el uso de firmas electrónicas y digitales en la operación cambiaria, con las características que se detallan en la Comunicación "A" 4345, y en la medida que se cumpla con la totalidad de los requisitos que se mencionan en la misma.

2. Regulación prudencial sobre solvencia.

2.1. Capitales mínimos.

2.1.1. Marco Introdutorio. Las normas de Basilea sobre capitales mínimos.

El Comité de Basilea se estableció como el Comité de Regulaciones Bancarias y Prácticas Supervisoras por parte de los Gobernadores de los bancos centrales del grupo de diez países (G-10) a fines de 1974 como consecuencia de serios problemas en los mercados e intermediarios financieros internacionales. La primera reunión tuvo lugar en febrero de 1975 y se han venido realizando regularmente reuniones tres o cuatro veces al año desde ese entonces.

Los miembros del Comité provienen de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. Los países están representados por su banco central y también por la autoridad con responsabilidad formal para la supervisión de la actividad bancaria cuando ésta no es el banco central.

Este Comité proporciona un foro para la cooperación regular entre sus países miembros en lo que se refiere a materias de supervisión bancaria, y también se ha ocupado de discutir modalidades para la cooperación internacional con la finalidad de cerrar las brechas en la red supervisora, mejorar el entendimiento supervisor y la calidad a nivel mundial de la supervisión bancaria. Cumple su labor a través de tres principales líneas de acción: intercambiando información sobre disposiciones supervisoras nacionales; mejorando la efectividad de las técnicas para supervisar los negocios bancarios internacionales; estableciendo standards mínimos para la suficiencia de capitales y chequeando la conveniencia de establecer standards en otras áreas.

El Comité no posee ninguna autoridad supervisora supranacional formal; por lo que sus conclusiones no tienen fuerza legal. Actúa formulando amplios standards y pautas supervisoras mediante la recomendación de buenas prácticas esperando que las autoridades individuales tomen las medidas para implementarlas a través de acuerdos más detallados para adecuar estos lineamientos a sus propios sistemas internos. De este modo, el Comité estimula la convergencia hacia enfoques comunes y standards comunes sin intentar una armonización detallada de las técnicas supervisoras de los países miembros.

Un objetivo importante encarado por el Comité ha sido el eliminar las brechas en la cobertura supervisora internacional a través de la búsqueda de dos principios básicos: que ningún establecimiento de banca extranjera pueda escapar a la supervisión; y que la supervisión sea la adecuada.

El tema al cual el Comité ha dedicado mucho de su tiempo en los últimos años es la suficiencia de capital. A principios de los ochenta el Comité se preocupó debido a que la relación de capitales de los principales bancos internacionales se fue deteriorando justo en el momento en que los riesgos internacionales, en especial aquellos vis-à-vis a países fuertemente endeudados, estaban creciendo. Con el respaldo del G-10, resolvieron detener la erosión de standards de capital en sus sistemas bancarios y trabajar para una mayor convergencia en la medición de la suficiencia del capital. Como culminación surgió un amplio consenso sobre un enfoque ponderado de la medición del riesgo, dentro y fuera del balance.

Dentro del Comité se reconoció la fuerte necesidad de un acuerdo multinacional para fortalecer la estabilidad del sistema bancario internacional y para eliminar una fuente de desigualdad competitiva provocada por las diferencias en las exigencias de capitales nacionales. Con posterioridad a comentarios incluidos en un documento de consulta publicado en diciembre de 1987, los representantes del G-10 aprobaron y entregaron a los bancos en julio de 1988 un sistema de medición de capital. Este incluía la implementación de un marco de trabajo con un standard de capital mínimo de 8% a fines de 1992. Desde 1988 esta estructura ha sido progresivamente incorporada no solo en los países miembros sino prácticamente en todos los otros países con bancos activos internacionalmente.

La estructura de capitales de 1988 no tuvo el propósito de ser estática sino de evolucionar a través del tiempo. En noviembre de 1991, se modificó para entregar una mayor precisión a la definición de aquellas provisiones generales para pérdidas por préstamos que podrían estar incluidas en el capital. En abril de 1995 y abril de 1996 también se introdujeron nuevas modificaciones.

También el Comité ha tomado a su cargo el trabajo de abordar otros riesgos diferentes al riesgo de crédito, que fue el tema principal del Acuerdo de 1988. En enero de 1996, emitió una modificación formal al Acuerdo de Capitales efectiva a más tardar a fines de 1997, diseñada para incorporar dentro del Acuerdo los riesgos de mercado derivados de las posiciones abiertas de los bancos en el mercado de moneda extranjera, valores de deuda transables, acciones, mercancías y opciones. El proyecto actualmente en discusión para alcanzar un nuevo acuerdo, Basilea 2, propone que como alternativa al método de medición estandarizado -parecido al método anterior pero basado sobre rating externos- a los bancos se les pueda permitir, sujetos a estrictos standards cuantitativos y cualitativos, utilizar modelos internos de valor de riesgo como una base para medir sus exigencias de capital de riesgo de mercado.

Además del trabajo en el Concordato y en los standards de capital los interrogantes sobre supervisión, en particular, han dado como resultado un documento conocido como "Principios básicos para una supervisión bancaria efectiva" en septiembre de 1997.

2.1.2. Regulación prudencial sobre capitales mínimos

El requerimiento de capital se determina considerando los riesgos implícitos en los distintos activos de la entidad. La norma de capitales considera tres tipos de riesgos: de contraparte¹, de tasa de interés² y de mercado³. Sin perjuicio de ello, las entidades deben mantener un capital mínimo básico (monto según zona geográfica a la que pertenezcan, de I a IV) fijado por el BCRA.

El capital mínimo que debe mantener una entidad financiera es el mínimo entre el capital básico y la suma de la exigencia de capital por riesgo de crédito (o de contraparte) y por riesgo de tasa de interés. Además, las entidades deben cumplir con una exigencia de capital por riesgo de mercado calculada de manera diaria.

El capital computable para el cumplimiento de la norma (responsabilidad patrimonial computable) se divide en básico y complementario. El primero de ellos se compone con el capital social, aportes no capitalizados, ajustes al patrimonio, reservas de utilidades y resultados no asignados. El patrimonio complementario, que no puede exceder el patrimonio básico, comprende los resultados no asignados que no cuenten con dictamen del auditor y los correspondientes al ejercicio en curso, el 50% del provisionamiento correspondiente a la cartera normal y la deuda subordinada con plazo promedio ponderado de cinco años⁴.

¹ Riesgo de contraparte: también denominado riesgo de crédito, es el riesgo de que el tomador del crédito no pague. El valor de los activos de riesgo surge de ponderar cada tipo de activo según el nivel de riesgo que se presupone asociado. Las ponderaciones relacionadas a los diferentes activos van desde 0% al 100%, influyendo también la calificación CAMELS (coeficiente k) que es una nota que asigna la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias referida al desempeño de las entidades. Esta calificación va de 1 a 5, siendo 1 la mejor situación y 5 la peor.

² Riesgo de tasa de interés: esta medición se establece para capturar el riesgo que surge cuando la sensibilidad ("duration") de los activos ante cambios en la tasa de interés no coincide con la de los pasivos (producto básicamente del descalce de plazos). Este efecto se refleja instantáneamente cuando se trata de activos con mercados secundarios, ya que un cambio en la tasa de interés produce una modificación en el precio de esos activos y, por consiguiente, en el balance de la entidad.

³ Riesgo de mercado: se exigen capitales mínimos en función del riesgo de mercado de los portafolios de las entidades medidos de acuerdo a su valor a riesgo (VaR). La norma incluye aquellos activos que tienen cotización habitual en los mercados y excluye los activos mantenidos en cuentas de inversión (estos últimos deben integrar capital por riesgo de tasa de interés y de contraparte). Se definen cinco categorías de activos. Los activos nacionales se dividen en acciones y en bonos públicos, los que a su vez se clasifican en dos zonas de acuerdo a si su vida promedio ("modified duration") es inferior o superior a 2,5. Las acciones extranjeras y los bonos extranjeros constituyen otras dos categorías: estos últimos también se subdividen en dos zonas, definidas de la misma manera que para los activos nacionales. La quinta categoría la constituyen las posiciones en moneda extranjera, con las distinciones del caso según sea la moneda de que se trate.

⁴ Esta última no puede superar el 50% del patrimonio neto básico. Del patrimonio neto básico deben deducirse los saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta que exceda el 10% de ese patrimonio neto básico o el 10% de la RPC (patrimonio neto básico más patrimonio neto complementario menos conceptos deducibles) de ambos valores el menor.

Existe una norma transitoria por la cual se fijó un coeficiente que reduce transitoriamente la exigencia de capital sobre las financiaciones al sector público no financiero otorgadas hasta el 31/05/03 y otro coeficiente que disminuye transitoriamente la exigencia de capital por riesgo de tasa de interés. Asimismo se fijó un cronograma de convergencia de esos coeficientes, a la unidad, amortiguando el impacto en la exigencia de aquellos componentes que mayor crecimiento verificaron como consecuencia de la crisis de fines de 2001.

2.2. Fraccionamiento y graduación del crédito (riesgo crediticio)

Esta normativa trata de limitar el riesgo económico, asegurando una diversificación mínima. Para ello considera tanto el capital del demandante de crédito como la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera.

La normativa relacionada con el capital del demandante de crédito fija como regla general que las financiaciones totales no pueden superar el 100% de la responsabilidad patrimonial de los clientes. Este límite se amplía hasta un 300% cuando el apoyo adicional no supera el 2,5% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera y cuenta con la aprobación del directorio o autoridad equivalente. En el caso de las operaciones a término se establecen distintos porcentajes para su cómputo de acuerdo a las características de la operación en materia de cobertura y cotización. Hasta diciembre de 2005 las entidades pueden otorgar nuevos créditos (hasta un tope global del 15% de la RPC de la entidad) por encima del límite vigente del 300% del patrimonio del deudor. La asistencia otorgada en estas condiciones a cada cliente no puede superar el 2,5% de la RPC de la entidad.

La normativa relacionada con la Responsabilidad Patrimonial computable (RPC) de la entidad financiera fija límites a la asistencia crediticia considerando entre otras variables si los clientes son o no vinculados, si la financiación cuenta o no con garantías y de qué tipo son las mismas, estableciendo también límites a la participación societaria en otras empresas⁵.

Este tipo de reglamentación incluye el **concepto de concentración del riesgo**, definido como la suma de las financiaciones que individualmente superen el 10% de la RPC de la entidad. Hasta diciembre de 2005 se excluye del cómputo de esta relación a los Bonos de Compensación o Pagarés recibidos por las

⁵ Las entidades financieras sólo pueden explotar empresas que brinden servicios complementarios a la actividad financiera (administración de fondos comunes de inversión, AFJPs, agente bursátil, explotación y administración de redes de cajeros automáticos, emisión de tarjetas de crédito y débito, administración de círculos cerrados de ahorro, operaciones de locación de bienes – leasing, gestión de cobranzas de servicios públicos, pagos de salarios, etc), El BCRA debe otorgar expresa autorización para que una entidad explote empresas comerciales, industriales o agropecuarias, siempre que se aplique a todas las entidades financieras y no afecte la solvencia de la entidad interesada.

entidades financieras, de acuerdo con lo establecido en el proceso de Canje I, II y III⁶.

Las financiaciones otorgadas por sucursales o subsidiarias locales de entidades financieras del exterior por cuenta y orden de la casa matriz y con fondos del exterior no están sujetas a las normas de fraccionamiento y graduación del crédito, siempre que la entidad extranjera posea una calificación "A" o superior, esté sujeta a reglas de supervisión consolidada y las operaciones involucradas se encuentren avaladas explícitamente por la casa matriz.

2.3. Clasificación de deudores, su provisionamiento y garantías.

Las normas de **clasificación de deudores** tienen por objeto establecer pautas claras que permitan identificar y clasificar la calidad de los mismos y evaluar los riesgos potenciales o reales de pérdidas de capital y/o intereses, a fin de determinar si las provisiones afectadas a tales contingencias son las adecuadas.

La cartera de préstamos se descompone en créditos comerciales y créditos para consumo y vivienda. La evaluación para la clasificación de los préstamos se realiza de acuerdo a la capacidad de pago y flujo de fondos del deudor en el caso de los préstamos comerciales, y por el grado de cumplimiento en el pago de la deuda para los préstamos de consumo y vivienda. En el caso de los préstamos comerciales entre los indicadores que pueden reflejar cada situación se encuentra: su liquidez, la estructura de financiamiento, el cumplimiento con el pago de sus obligaciones, la calidad de su dirección y el management, los sistemas de información que posee, las perspectivas de la actividad económica que realiza el cliente, su ubicación dentro del sector de actividad, su situación jurídica, la existencia de refinanciaciones y quitas, entre otros.

Cada cliente y la totalidad de sus deudas se incluye en alguna de las seis categorías que prevé la norma en orden decreciente de calidad crediticia y está relacionada directamente con el nivel de provisionamiento exigido, a menor calidad de deuda mayor nivel de provisionamiento.

El **provisionamiento** debe realizarse al momento del otorgamiento del crédito, y debe ajustarse según surja de revisiones periódicas del mismo. Se excluyen las financiaciones al sector público. En apretadísima síntesis, cuando la situación del deudor es normal (calificación 1) se provisiona sólo el 1%, mientras que cuando existe alto riesgo de insolvencia (calificación 4) se provisiona el 25% si existen garantías y el 50% si no existen garantías, provisionándose el 100% para los créditos sin garantías y el 50% para los que sí las poseen cuando el deudor sea considerado irrecuperable (calificación 6).

⁶ Previsto en los artículos 28 y 29 del Decreto 905/02 y modificatorios.

Las garantías se clasifican en Preferidas “A”, Preferidas “B” y otras.

Las **Preferidas “A”** están constituidas por la cesión o caución de derechos de títulos o documentos de forma tal que la entidad tenga asegurada la cancelación de la obligación dada la existencia de terceros solventes o mercados para la venta de los títulos. El plazo residual de las operaciones de crédito no debe superar los 6 meses, salvo que se trate de operaciones que estén cubiertas con garantías en efectivo, certificados de plazo fijo de la misma entidad y en las operaciones cuya garantía sea la cesión del cobro de peajes, además de los avales y cartas de crédito emitidos por bancos del exterior con calificación internacional “AA”, para los cuales el plazo residual se extiende a un año.

Las garantías **preferidas “B”** están constituidas por derechos reales sobre bienes o compromisos de terceros que le aseguren a la entidad la cancelación de la obligación cumpliendo con los procedimientos para la ejecución de dichas garantías. Se incluyen las hipotecas en primer grado, prenda fija en primer grado o con desplazamiento hacia la entidad, seguros de crédito a la exportación en la medida en que se efectivicen los siniestros entre los 90 y 180 días, garantías o avales otorgados por sociedades de garantías recíprocas (que no puedan ser considerados garantías “A”) y las que cumplen las condiciones necesarias para ser preferidas “A” excepto lo de tener un plazo residual menor a 6 meses.

Restantes garantías: Para la determinación de operaciones cubiertas con garantías se computará el capital y los intereses de la deuda teniendo en cuenta los márgenes de cobertura previsto para cada tipo de garantía.

2.4. Operaciones con clientes vinculados

Las normas establecen límites al riesgo que surge de las operaciones crediticias con personas físicas o jurídicas vinculadas a una entidad financiera⁷. El concepto de vinculación generalmente se asocia con un grado de control y la definición de financiaciones incluye la tenencia de acciones y los préstamos, garantías otorgados por una entidad, sus filiales en el exterior y bancos en el exterior sobre los que la entidad local posea control. Deben presentar una declaración jurada acerca de su relación con la entidad, de vinculación o control:

- a) aquellos clientes de una entidad financiera cuya deuda exceda el 2,5% de la RPC ó \$ 1.000.000 (de ambos, el menor);
- b) personas directamente o indirectamente vinculadas a la entidad que posean el 5% del capital o de los instrumentos de voto de la institución.

⁷La definición de vinculación se basa en criterios de control de la voluntad empresaria, medido por la participación accionaria, mayoría de directores comunes, o participación actual o potencial en órganos directivos.

2.5. Activos inmovilizados y otros conceptos.

Los activos definidos como inmovilizados no deben superar el 100% de la RPC de la entidad, estando incluidos en este concepto las acciones de empresas del país, los créditos diversos, los bienes para uso propio, los bienes diversos, los gastos de organización y desarrollo, la llave de negocios y las financiaciones a clientes vinculados. Se computan en base a saldos de fin de mes netos de depreciaciones, amortizaciones acumuladas y provisiones por incobrabilidad. Los incumplimientos a esta relación técnica generan un incremento de capitales mínimos equivalente al 100% del exceso de la relación. Existen medidas transitorias después de la crisis del 2001 que exceptúan de dicho cómputo a los bienes tomados en defensa de créditos incorporados al patrimonio de la entidad al 31/03/03 y los importes activados de las diferencias resultantes del cumplimiento de medidas judiciales (amparos) por devolución de depósitos en su moneda original.

2.6. Posición global neta de moneda extranjera

En la posición global neta de moneda extranjera se consideran la totalidad de los activos y pasivos por intermediación financiera en moneda extranjera y en títulos en moneda extranjera. Se incluyen las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en el ámbito de mercados autorregulados del país, con la modalidad de liquidación por diferencia (mark to market), sin entrega del activo subyacente.

A partir de mayo de 2003 el valor absoluto de la posición global neta de moneda extranjera no podrá superar el 30% de la RPC. En el caso de que la posición sea positiva, el importe no podrá superar dicha relación o los recursos propios líquidos, lo que sea menor. Se entiende por recursos propios líquidos a la RPC menos los activos inmovilizados y las financiaciones otorgadas a clientes vinculados. Los excesos a esta relación están sujetos al pago de cargos.

2.7. Capacidad de préstamo en moneda extranjera.

Las disposiciones sobre aplicación de recursos en moneda extranjera establecen que la capacidad prestable proveniente de los depósitos constituidos en moneda extranjera, incluidas las imposiciones a plazo en dólares estadounidenses liquidables en pesos, deberá aplicarse, en forma indistinta a destinos tales como:

- a) prefinanciación y financiación de exportaciones,
- b) financiaciones a productores de bienes para ser exportados,
- c) títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros cuyo activo subyacente esté constituido por préstamos originados por las entidades financieras destinados a a) ó b),
- d) préstamos interfinancieros,

- e) títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros emitidos en moneda extranjera y con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, cuyos activos subyacentes estén constituidos por documentos comprados por el fiduciario, garantizados por sociedades de garantía recíproca, con el fin de financiar operaciones de exportación.

Los excedentes de capacidad prestable por encima de los destinos antedichos generan una exigencia adicional de efectivo mínimo en esa moneda, por lo que deben mantenerse en efectivo en dólares o depositarse en el BCRA.

3. Regulación prudencial sobre liquidez.

3.1. Efectivos mínimos.

El régimen de liquidez está basado en el requisito de efectivo mínimo sobre las operaciones a la vista y a plazo. Se aplica sobre el promedio mensual de saldos diarios de los depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera a la vista y a plazo, en pesos y en moneda extranjera (inclusive títulos públicos y privados) y sobre los saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados.

Se excluyen las obligaciones con el BCRA, con entidades financieras locales, las obligaciones con bancos del exterior –incluidas casas matrices y controlantes de entidades locales por líneas de financiación de operaciones de comercio exterior-, las compras y ventas a término y al contado a liquidar y las obligaciones a la vista por giros y transferencias del exterior y corresponsalía.

Existen diferentes niveles de tasas de exigencia para los depósitos en pesos y moneda extranjera. Las mismas se aplican sobre el plazo residual de los pasivos y en forma creciente a medida que se aproxima la fecha de vencimiento.

La integración debe efectuarse en la misma moneda que corresponda a la exigencia, pudiéndose realizar con distintos instrumentos, tales como: efectivo en caja, cuentas corrientes de las entidades financieras en el BCRA, cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensación, cuentas corrientes de las entidades no bancarias, cuentas especiales de garantías por la operatoria con cheques cancelatorios, cuentas corrientes especiales abiertas en el BCRA con la atención de los beneficios provisionales a cargo de la ANSES.

La remuneración de las cuentas en el BCRA relacionadas con las reservas de liquidez sólo se realiza hasta los montos correspondientes a las exigencias legales, no remunerándose las reservas en exceso a esa exigencia.

Cuando se verifique una concentración excesiva de pasivos (en titulares y/o plazos) que impliquen un riesgo significativo respecto de la liquidez de una entidad financiera o sistémica, el BCRA podrá fijar requisitos adicionales sobre los pasivos de esas entidades o tomar las medidas complementarias que estime pertinentes.

Las deficiencias de integración de efectivo mínimo están sujetas al pago de cargos.

3.2. Asistencia financiera del BCRA por iliquidez

El BCRA estableció criterios para el otorgamiento de asistencia financiera a las entidades financieras de manera tal que aquellas que los satisfagan puedan acceder directamente a los recursos otorgados por el BCRA, mientras que para aquellas que no los alcancen, el Directorio del BCRA evaluará la solicitud y determinará su aprobación o desestimación. Los criterios se basan en la evolución de la liquidez, el monto solicitado, la caída de los depósitos experimentada en el último mes, el programa monetario del BCRA, y la RPC de la entidad solicitante.

Además se estableció un procedimiento por el que las entidades financieras pueden anticipar aportes para la futura cancelación de capital de los redescuentos recibidos, cuyos cronogramas de pago se previeron en el régimen de “matching” (Capítulo II Decreto 739/03). Las entidades que deseen acogerse a este régimen deben participar de una licitación, cotizando el monto que pretenden adelantar y la tasa nominal que estén dispuestas a pagar por ese derecho. Con el propósito de que la licitación sea equitativa, se determinó un máximo adjudicado a cada entidad del 30% del monto total licitado.

4. Creación y expansión de entidades financieras y cambiarias.

Existe total libertad para la entrada o salida de las entidades financieras del mercado, así como para su fusión o absorción. La legislación argentina no establece restricciones en relación con la nacionalidad de los inversores que deseen participar en el sistema financiero local ni en cuanto a las operaciones que pueden realizar las entidades en que éstos participen, rigiendo el principio de igualdad de tratamiento para el capital nacional y el extranjero.

4.1. Instalación de nuevas entidades financieras.

La instalación de nuevas entidades financieras requiere la previa autorización del BCRA, conforme a lo previsto en el artículo 7° de la Ley de entidades financieras. El criterio adoptado por dicha ley es el de especialización de los intermediarios, salvo para el caso de los bancos comerciales para los cuales rigen un criterio de banca universal, ya que tienen permitidas todas las operaciones que no les estén expresamente prohibidas. Los diferentes intermediarios enumerados en la ley son: bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, y cajas de crédito. A su vez, los bancos comerciales se distinguen, según las operaciones autorizadas a realizar en: de primer grado y de segundo grado.

El capital mínimo requerido se determina en función de la jurisdicción donde se encuentre radicada la sede principal de la entidad, con niveles decrecientes de exigencia básica, como se detalla en el siguiente cuadro:

Categoría Comunicación "A" 4368	Bancos	Restantes entidades (salvo cajas de crédito)
I	\$ 25.000.000	\$ 10.000.000
II	\$ 14.000.000	\$ 8.000.000
III	\$ 12.500.000	\$ 6.500.000
IV	\$ 10.000.000	\$ 5.000.000

El canon que, previo a la habilitación, deben abonar al BCRA las entidades financieras que no sean bancos (salvo las cajas de crédito que están exentas) asciende a \$ 400.000. El canon correspondiente a nuevos bancos es de \$ 900.000. Para las cajas de crédito, que deben constituirse como sociedades cooperativas y sólo pueden operar en casa única y exclusivamente con sus asociados, los que deben estar radicados en la jurisdicción en que opera la entidad, el capital mínimo requerido es entre un mínimo de \$ 100.000 y un máximo de \$ 1.000.000, en función de la cantidad de habitantes de la respectiva jurisdicción.

Para la instalación de sucursales de entidades financieras extranjeras rigen los requisitos y condiciones previstos para el establecimiento de nuevas entidades y, además, que el país de origen cuente con un régimen de supervisión sobre base consolidada.

4.2. Fusión, absorción y transferencia de fondo de comercio.

La fusión, absorción o transferencia de fondo de comercio, que puede ser convenida entre entidades de igual o distinta clase, también está sujeta a la previa autorización del BCRA.

La entidad resultante de la fusión, o la que absorba a otra o incorpore su fondo de comercio debe presentar una estructura económico-financiera que a juicio del BCRA justifique autorizar la concreción del proyecto.

Las cajas de crédito no pueden transferir sus fondos de comercio a entidades de otra naturaleza jurídica ni transformarse en entidades comerciales.

4.3. Transformación de entidades financieras.

Sujeta a la aprobación del BCRA, las entidades financieras pueden transformarse en otras de distinta clase. Son requisitos esenciales para obtener tal autorización cumplir con las exigencias de capital mínimo, así como con otras regulaciones prudenciales y no presentar problemas de liquidez, solvencia, riesgo o rentabilidad.

4.4. Modificación de la composición accionaria.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Entidades Financieras, las entidades se encuentran obligadas a informar sin demora sobre cualquier negociación de acciones u otra circunstancia capaz de producir un cambio en la calificación de las entidades, o de alterar la estructura de los respectivos grupos de accionistas. Asimismo, el BCRA debe considerar la oportunidad, mérito y conveniencia de esas modificaciones, encontrándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieran producido cambios fundamentales en las condiciones básicas oportunamente tenidas en cuenta para acordarlas.

La normativa establece que los directores, miembros de los consejos de vigilancia y síndicos de las entidades financieras constituidas como sociedades anónimas, deben informar a la Superintendencia de Entidades Financieras (SEFyC) cualquier negociación de acciones capaz de producir cambios en la calificación de las entidades, o de alterar la estructura de los respectivos grupos de accionistas. Deben comunicarse las transferencias accionarias o ingresos de aportes irrevocables para futuros aumentos de capital que, individual o conjuntamente consideradas en un período de seis meses, representen un 5% o

más del capital y/o de los votos, aunque a juicio de la entidad no produzcan cambios en su calificación ni alteren la estructura de los grupos de accionistas.

Aquellas entidades financieras que realicen ofrecimientos de suscripción de acciones en bolsas de comercio del país o del exterior deben, en forma previa a su concreción, comunicar sus características a la SEFyC y, posteriormente informar quiénes son los suscriptores o adquirentes involucrados, así como proporcionar determinados datos sobre los mismos cuando sus tenencias individuales excedan el 2% del capital social.

También deben notificarse a la SEFyC las modificaciones significativas que se produzcan en la composición accionaria de las personas jurídicas con domicilio en el extranjero que, directa o indirectamente, controlen entidades financieras constituidas en el país.

4.5. Directivos y Gerentes.

Las entidades financieras deben someter a la consideración del BCRA los antecedentes de las personas que ocuparán cargos en el Directorio o Consejo de Administración, excepto que se trate de designaciones por renovación de mandatos. Previo a su paso por el Directorio, estos son evaluados por un Comité de Idoneidad y Experiencia.

4.6. Instalación de filiales

4.6.1. Instalación de filiales y otras dependencias en el país.

La expansión territorial de las entidades financieras a través de la apertura de filiales en el país (artículo 16 de la Ley de Entidades Financieras), requiere la previa aprobación del BCRA, que se halla facultado para denegar las solicitudes fundado en razones de oportunidad y conveniencia.

Las entidades financieras oficiales de las provincias y municipalidades pueden habilitar sucursales en sus respectivas jurisdicciones previo aviso al BCRA, el que podrá expedirse manifestando su oposición si no se cumplieran los requisitos normativos exigidos para la habilitación.

En el marco legal vigente, existen disposiciones reglamentarias que deben cumplir las entidades para poder instalar nuevas filiales, referidas básicamente al adecuado cumplimiento de las regulaciones prudenciales sobre capitales mínimos, liquidez, solvencia, riesgo y rentabilidad, así como a la compatibilidad con el plan de negocios presentado al BCRA y aprobado por la SEFyC.

4.6.2. Instalación de filiales y oficinas de representación en el exterior.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Entidades Financieras se requiere la autorización del BCRA para instalar sucursales y oficinas de representación en el exterior. Las normas prevén que deben cumplimentarse requisitos similares a los establecidos para la apertura de filiales en el país y, adicionalmente, contar con el consentimiento del país extranjero. Las oficinas de representación sólo pueden desarrollar actividades no operativas.

4.6.3. Participación en entidades financieras en el exterior.

Toda participación de las entidades financieras locales en otras del exterior, en porcentajes superiores al 5% del capital o de los votos de éstas últimas, debe contar con la previa autorización de la SEFyC, para lo cual deben cumplimentar las regulaciones prudenciales de capitales mínimos, liquidez, solvencia, riesgo y rentabilidad.

La responsabilidad de la entidad local está limitada al aporte de capital previsto en la resolución autorizante, no pudiendo asumir obligaciones solidarias ni compromisos adicionales respecto de las operaciones o actividades que realice la entidad extranjera.

No está permitido mantener participaciones en entidades financieras del exterior cuyos balances deban consolidarse con los de la entidad local, de acuerdo con las normas pertinentes, si la SEFyC no puede disponer de la información que considere necesaria para evaluar la situación consolidada.

4.6.4. Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Entidades Financieras, para que las entidades del exterior puedan establecer una oficina de representación en el país deben contar con la previa autorización del BCRA.

El acuerdo de la autorización está condicionado al análisis y ponderación que la SEFyC realice de los antecedentes y responsabilidad de la entidad a ser representada y de su representante. Además, se exige que el régimen financiero del país de origen (excepto que se trate de un país limítrofe) esté sujeto a un sistema de supervisión consolidada. La actividad puede ser ejercida tanto por personas de existencia ideal como por personas de existencia visible, admitiéndose la designación de un representante adjunto.

5. Fuentes informativas:

- Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) – www.bcra.gov.ar, textos ordenados de las diferentes normas vigentes y Comunicaciones “A”, “B” y “C” emitidas por el BCRA.
- BCRA - Informes al Congreso Nacional, Informes de inflación, Programa monetario 2005, Boletín de estabilidad financiera segundo semestre 2005, seguimiento del programa monetario trimestral y mensual, en la página web www.bcra.gov.ar
- BCRA (2005) - Resumen de las principales regulaciones del sistema financiero argentino, Buenos Aires, setiembre.
- BCRA (2001) - Reservas de liquidez para el sistema financiero argentino, Buenos Aires, mayo.
- Del Pino Suárez, Estela Marina (1991) –“Indicadores de alerta anticipada para la supervisión de la gestión bancaria”, Tesis de postgrado presentada a la Escuela de Especialización en Disciplinas Bancarias de l’Università degli Studi di Siena y Universidad Nacional de La Plata, diciembre.
- Del Pino Suárez, Estela Marina (2003) – “Reforma del Estado en el Banco Central de la República Argentina. La regulación y supervisión del sistema financiero en los años 90”, Tesis de postgrado presentada a la Universidad de San Andrés para la Maestría de Administración y Políticas Públicas, julio.
- Hall, Maximilian J. B. (2001) - The Basle Committee’s proposals for a new capital adequacy assessment framework: a critique, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, N° 217, June.
- Tonveronachi, Mario (2001) – Distorsioni strutturali della regolamentazione prudenziale delle banche, BNL Moneta e Credito, diciembre 2001, versión revisada de la presentación efectuada a la Conferencia Anual de la European Association of University Teachers in Banking and Finance, 6 y 7 de setiembre.
- Tonveronachi, Mario (2003) - Intervención en un congreso sobre Basilea II, Siena, Italia, 26 de junio.
- Bavestrello, Alberto (2000) – El sistema bancario a partir de la convertibilidad, trabajo inédito.